

Señores:

JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (Reparto)

E. S. D.

Ref. Acción de tutela

Accionante: Wilson Gerley Cárdenas Nonsoque

Accionada: BBVA Seguros Colombia S.A., y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. (BBVA COLOMBIA)

Asunto: Violación al derecho fundamental de petición

Respetado señor Juez:

WILSON GERLEY CÁRDENAS NONSOQUE, Identificado con la cédula de ciudadanía número 80.732.534 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la tarjeta profesional número 158.006 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de en mi calidad de apoderado especial de la señora LIBIA MÉNDEZ, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía número 41.445.363 de Bogotá, conforme con el poder que se anexa, por medio del presente escrito comparezco en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y concurro ante su despacho con el fin de instaurar Acción de Tutela en contra de BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A., y BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. (BBVA COLOMBIA), para que mediante la misma sea tutelado mi derecho fundamental de petición contenido en el artículo 23 de la Constitución Política, y en virtud del mismo se atiendan las peticiones presentadas a esa entidad de con base en lo siguiente:

I. PARTES Y REPRESENTANTES

1.1. Accionadas: BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A., entidad identificada con NIT. 800.240.882 - 0 y BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. (BBVA COLOMBIA) entidad identificada con NIT. 860.003.020-1, ambas con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C.

1.2. Accionante: WILSON GERLEY CÁRDENAS NONSOQUE, Identificado con la cédula de ciudadanía número 80.732.534 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la tarjeta profesional número 158.006 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de peticionario.

II. PRETENSIONES

De acuerdo a los fundamentos facticos presentados de forma respetuosa solicito al señor Juez:

2.1. Amparar mi derecho fundamental de petición (art. 23 Constitución Política), vulnerado por BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.

2.2. Ordenar a BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A., dar respuesta de fondo a la petición de fecha 08 de febrero de 2021 mediante la cual se solicitó que fuera remitida la comunicación de revocatoria del seguro y el recibimiento del cliente sobre dicha supuesta revocatoria, además del reconocimiento y pago del siniestro N°. 1794500.

2.4. Ordene vincular al Banco BBVA COLOMBIA para que solidariamente de respuesta de fondo acerca de reconocer y pagar el amparo por la muerte del señor SAÚL ANTONIO MARTÍNEZ NÚÑEZ, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 3.043.631 (Q.E.P.D.), y titular de la obligación n° 9600099658.

2.5. Que la orden impartida por el señor Juez, sea de inmediato cumplimiento.

III.FUNDAMENTOS FÁCTICOS

3.1. SAÚL ANTONIO MARTÍNEZ NÚÑEZ, (Q.E.P.D.) quien en vida con cédula de ciudadanía número 3.043.631 y su esposa, LIBIA MÉNDEZ identificada con cédula de ciudadanía número 41.445363 de Bogotá D.C., domiciliada y residente en la misma; adquirieron una obligación con la entidad bancaria BANCOLOMBIA S.A.

3.2. Tal obligación fue subrogada al BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA, quien a la fecha continua como acreedor titular de la misma bajo el N° 0013346509600099658.

3.3. SAÚL ANTONIO MARTÍNEZ NÚÑEZ, identificado en vida como se mencionó anteriormente, falleció el día 03 de enero de 2019, en la ciudad de Bogotá, donde tuvo su último domicilio.

3.4. Con ocasión del fallecimiento de su esposo, LIBIA MÉNDEZ permaneció como única titular de la obligación contraída al igual que se convirtió en única beneficiaria del seguro de vida.

3.5. Mediante solicitud de pago de siniestro radicada el día 26 de septiembre de 2019, se aportó la debida y completa documentación para el pago del siniestro, informando dirección y correo electrónico para su correspondiente notificación.

3.6. En virtud del silencio por parte de la entidad de seguros, el pasado 24 de diciembre se reiteró la misma a través de un derecho de petición, solicitando *“copia de respuesta formal a la petición de pago radicada el día 26 de septiembre de 2019, con número de siniestro 1794500, debido a que a la fecha de esta petición no se allega notificación electrónica o física con respuesta a la misma, en contravía de lo reglado por el artículo 1080 del Código de Comercio”*

3.7. La segunda petición tampoco obtuvo respuesta.

3.8. Se instauró acción de tutela y con ello se obtuvo una respuesta en la cual el 10 de agosto de 2020, BBVA Seguros informó: *“Una vez analizados los documentos soporte y realizado el respectivo control de cartera, hemos evidenciado que el Seguro de Vida Deudores que ampara el crédito N.º 00130346509600099658, se encuentra cancelado desde 27 de noviembre de 2018, lo que nos indica la inexistencia de cobertura”...*

3.9. Se instauró el día 08 de febrero de 2021 una nueva petición solicitando fuera remitida la comunicación mediante la cual se realizó la supuesta revocatoria del seguro, con la correspondiente constancia de recibido del cliente.

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Me permito invocar como fundamentos de derecho de la presente acción de tutela los artículos 15, 20, 23 y 86 de la Constitución Política Nacional; el Decreto 2591 de 1991, el artículo 1 y 8 de la Ley 1266 de 2008, el artículo 13 y siguientes de

la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-; la Ley 1755 de 2015; así como las demás normas concordantes y aplicables al presente caso.

4.1. Sobre el Derecho de Petición.

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

La norma constitucional anterior fue reglamentada por la ley 1437 de 2011 en los artículos 13 y subsiguientes, los cuales fueron sustituidos por la ley 1755 de 2015, la norma establece al tenor:

“Artículo 13 Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos [...].”

De igual manera, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, subrogado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, determina los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones de tal forma:

“Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

4.1.1. Del derecho de petición ante particulares.

No obstante, con la expedición de la Ley Estatutaria 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, quedó regulado el ejercicio del derecho de petición frente a particulares en sus artículos 32 y 33, que en gran medida, recogieron las reglas que habían sido creadas por la Corte en su jurisprudencia. Como se observa a continuación:

Artículo 32. Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes.

4.1.2. De la respuesta a las peticiones.

Por lo expresado consecuentemente, la entidad accionada no ha contestado las peticiones, lo que es una clara omisión a su deber constitucional y una violación al derecho a elevar peticiones, además de la violación a otra esfera de las respuestas que deben darse, las respuestas deben ser claras, y de fondo, y la respuesta anterior a la petición que aún no contestan, no está conforme con lo solicitado y lo estipulado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en Sentencia T-230 de 2020:

4.5.4. Respuesta de fondo. Otro componente del núcleo esencial supone que la contestación a los derechos de petición debe observar ciertas condiciones para que sea constitucionalmente válida. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la respuesta de la autoridad debe ser: "(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y además (iv.) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex Novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente..."

4.2. Del derecho al habeas Data.

La aseguradora también ha incurrido en una violación al habeas data que se configura, con el supuesto de cancelar un seguro de vida, cuando nunca fue solicitada tal actuación, además, no informó de ello a mi representada y contradiciéndose, al seguir haciendo los cobros por ese concepto. En concordancia a la ley del habeas data, estas informaciones que suministradas deben ser comprobables y actualizadas.

Ley 1266 de 2008.

"...ARTÍCULO 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, particularmente en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países..."

"...ARTÍCULO 8º. Deberes de las fuentes de la información. Las fuentes de la información deberán cumplir las siguientes obligaciones, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad:

1. Garantizar que la información que se suministre a los operadores de los bancos de datos o a los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable.

2. Reportar, de forma periódica y oportuna al operador, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada.

3. Rectificar la información cuando sea incorrecta e informar lo pertinente a los operadores."

4.3. De la obligación de no extender los siniestros.

Aunado a lo anterior, el Decreto 410 de 1971 –Código de Comercio-establece en el Título V “del contrato de seguro” la obligación de evitar la extensión y propagación del siniestro, según el cual; ocurrido el siniestro, el asegurado estará obligado a evitar su extensión y propagación, y a proveer al salvamento de las cosas aseguradas.

El asegurador se hará cargo, dentro de las normas que regulan el importe de la indemnización, de los gastos razonables en que incurra el asegurado en cumplimiento de tales obligaciones

4.4. De la acción de tutela.

Este mecanismo está dispuesto en la Constitución política de 1991 y por virtud del bloque de constitucionalidad, se integran los tratados internacionales, que también exigen la existencia de estos mecanismos de acceso a la justicia.

“...ARTICULO 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo.

En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido

ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia...”

Siguiendo la integración normativa de igual fuerza y hasta superior, anoto lo que indica el Pacto de San José):

“...Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 25 Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso...” (resaltado propio)

4.4.1. De la procedencia de esta acción de Tutela

Esta acción es procedente por cuanto se sigue presentando la vulneración a mis derechos fundamentales de elevar peticiones y obtener respuesta de fondo, y el derecho de Habeas data. En el caso presente, se presentan nuevos hechos, por una nueva petición sin obtener respuesta y la configuración de la vulneración al habeas data, lo cual es procedente acorde al precedente sentado por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia CC T 777 de 2014:

Sin embargo, esta Corporación también ha señalado que cuando se invocan nuevos hechos, como cuando la autoridad demandada continúa vulnerando los

derechos del accionante, o cuando el rechazo de la primera tutela es atribuible a errores en el trámite de la tutela por parte del juez, puede adelantarse un nuevo recurso de amparo sin que se dé lugar a una conducta temeraria. En todo caso, solamente se podrá presentar otra acción de tutela cuando no haya sido posible prever los nuevos hechos con anterioridad a la interposición de la acción, lo cual exige realizar una verificación minuciosa de las circunstancias fácticas puestas a consideración del juez.

Como fundamento de lo anterior, recientemente esta Corte en Sentencias como la T-096 de 2011 y la T-568 de 2013, ratificó su posición frente a la ausencia de temeridad. Al respecto indicó:

“Como se puede observar, si tras haber interpuesto una tutela por determinados hechos y con determinadas pretensiones, se presentan hechos nuevos imposibles de descubrir antes, que dan lugar a otras pretensiones y que vulneran los derechos fundamentales del actor o de su representado, es posible interponer nuevamente acción de tutela para proteger dichos derechos sin que se configure un caso de temeridad. En estos eventos los supuestos de hecho tienen uno o varios elementos adicionales que permiten la interposición de una nueva acción, siempre y cuando se haya vulnerado nuevamente un derecho fundamental.

V. PRUEBAS Y ANEXOS

Solicito al señor Juez, tener como pruebas las siguientes:

1.1. Documentales:

1.1.1. Copia del Derecho de Petición de fecha 08 de agosto de 2021.

1.1.2. constancia de envío presentado a BBVA Seguros de Vida S.A. con solicitud de reclamación del seguro de vida de SAÚL ANTONIO MARTÍNEZ NÚÑEZ,.

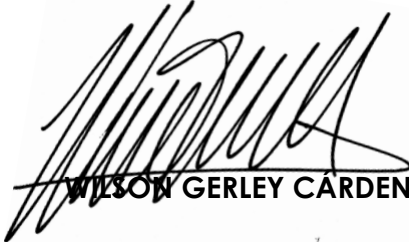
VI. NOTIFICACIONES

Para los efectos procesales correspondientes, se puede notificar a las partes de tal manera:

1.2. Accionante: Recibo notificaciones en la dirección Carrera 12 N.º 71 – 32 oficina 401 o al correo electrónico notificaciones@rcfclegal.com

1.3. Accionada: BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A y BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A., reciben notificaciones en la Carrera 7 N.º 71 – 52 Torre A, piso 12 notifica.co@bbva.com

Del Señor Juez,



WILSON GERLEY CÁRDENAS NONSOQUE